

La consulta plantea si la actuación realizada entre la entidad consultante y la empresa de transporte sanitario exigen el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

Según se desprende del contenido de la consulta, la actividad de la empresa de transporte se limita a transportar a los pacientes designados por el hospital para que reciban las sesiones de rehabilitación que les corresponde, cumplimentado para ello con los volantes sellados que entregan al órgano administrativo a efectos de control de la actividad de transporte sanitario.

No se deduce claramente de la consulta, la relación jurídica que une a la entidad consultante con el servicio de ambulancia y la relación de éste último con la Gerencia regional de salud de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto al desconocer que tipo de relación jurídica es la que vincula a los entes entre sí, no podemos efectuar una respuesta concreta.

Puede darse el supuesto, en el que el servicio de ambulancia fuese un encargado del tratamiento del hospital, es decir, presta servicios al hospital que éste a su vez le ha contratado, y por ello las medidas de seguridad a adoptar son las que resulten coherentes con el artículo 82 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, además de exigir la celebración de un contrato escrito que cumpla con los requisitos del artículo 12 de la Ley Orgánica y los de los artículos 20 al 22 del Reglamento.

Centrándonos en las medidas de seguridad el artículo 82 concreta que “1. Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de tratamiento que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose el

personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.

Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, este último deberá hacer constar esta circunstancia en el documento de seguridad del responsable, comprometiéndose el personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.

2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por el artículo 88 de este reglamento o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.

3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido a las medidas de seguridad contempladas en este reglamento.”

Si por el contrario la relación entre la entidad consultante y el servicio de ambulancias no constituyese una prestación de servicios en los términos antes expuestos, la comprobación de los datos constituiría una cesión, definida en el artículo 3 i) de la Ley como “toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado”, cuyo régimen jurídico esta previsto en el artículo 11, y para el caso de datos de salud como sería en el presente supuesto, en el artículo 7 de la Ley Orgánica.

El citado artículo 7 dispone en su apartado tercero que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.” Continúa señalando el apartado sexto del mismo artículo que “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”

El supuesto planteado en la consulta, puede ajustarse al criterio fijado en el artículo 7.6 esto es, poder tratar y comunicar los datos para la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, sin necesidad de recabar el consentimiento expreso del afectado. En este caso, si debe exigirse al personal de la empresa de transporte sanitario una obligación de secreto profesional o equivalente.

En consecuencia, la media planteada por la entidad consultante, sí que resulta correcta, pero no amparándose en el artículo 91.5 del Reglamento, pues no encaja la actuación en dicho supuesto, dado que no hay acceso a los recursos en sentido estricto, sino amparándose en el artículo 7.6 de la Ley Orgánica.

A mayor abundamiento, debe subrayarse que el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica fija los objetivos mínimos para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos, nada obsta para que una entidad decida adoptar un criterio de actuación que ofrezca mayores garantías en su sistema de información.